

Poder Judicial de la Nación

ACORDADA EXTRAORDINARIA NÚMERO TREINTA Y TRES: En Buenos Aires, a los once días del mes de mayo de dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Cámara Nacional Electoral, los doctores Santiago Hernán Corcuera y Alberto Ricardo Dalla Via, actuando el Secretario de Actuación Judicial doctor Hernán Gonçalves Figueiredo. Abierto el acto por el señor Presidente, doctor Santiago Hernán Corcuera,

CONSIDERARON:

1º) Que el artículo 38 de la Constitución Nacional impone expresamente a los partidos políticos la obligación de rendir cuentas a la Nación. Esta exigencia deriva del principio republicano de dar publicidad de los actos de gobierno (cf. Fallos CNE 3010/02; 3230/03; 3240/03; 3257/03; 3336/04; 3402/05; 3403/05; 3417/05; 3449/05; 3494/05; 3605/05; 3655/05; 3680/05; 3692/06; 3700/06; 3703/06; 3725/06; 3783/07; 3824/07; 3982/08; 4266/09; 4338/10; 4365/10; 4853/12; 5104/13; 5207/13; 5220/14, entre otros).-

2º) Que, en tal sentido, la ley de financiamiento de los partidos políticos (26.215), reglamentaria del artículo 38 de la Constitución Nacional, encomienda a la Justicia Nacional Electoral -al igual que los regímenes que históricamente la precedieron- el control de legalidad sobre el origen y destino de los fondos y patrimonio de las agrupaciones partidarias. Este rol también resulta de la ley 19.108, que le asigna al fuero competencia para conocer -a pedido de parte o de oficio- "en todas las cuestiones relacionadas con [...] el efectivo control y fiscalización patrimonial de los partidos políticos" (art. 12, inc. c).-

En ese orden de ideas, en numerosas ocasiones el Tribunal ha destacado que en las causas destinadas al control del financiamiento partidario, debe predominar el principio de celeridad (cf. Fallos CNE 3356/04; 3730/06; 3790/07; 3981/07; 4003/08; 4037/08; 4086/08; 4178/09; 4179/09; 4244/09; 4265/09; 4266/09; 4443/10; 4524/11 y 5162/13) y, en ese entendimiento, estableció -aun antes de sancionarse la ley 26.215- que tales actuaciones deben, en la teleología de la norma, finalizar antes de que se inicie el siguiente proceso

electoral (cf. Fallos CNE 3356/04; 3709/06; 4086/08; 4178/09; 4179/09; 4265/09; 4266/09; 4317/10 y 4520/11).-

Posteriormente, la ley 26.215 -que, con las modificaciones introducidas por la ley 26.571, rige en la actualidad- estableció términos máximos para el desarrollo de los procesos de control patrimonial (artículos 26 y 61). Así, con relación a los informes finales de campaña, el artículo 61 prevé un plazo "máximo de ciento ochenta (180) días para la realización de la auditoría de los informes finales de campaña y treinta (30) días para la elaboración y notificación a los partidos políticos del dictamen correspondiente[,] [a cuyo] [v]enci[miento] [...] el juez federal con competencia electoral dentro del plazo de treinta (30) días deberá resolver".-

Precisamente, a raíz de la limitación legal impuesta a la duración de los trámites de control patrimonial - y para poder asegurar intervenciones oportunas-, teniendo en cuenta la experiencia acumulada en la aplicación de los regímenes de las leyes 25.600 y 26.215, pero también la heterogeneidad de los trámites impresos a tales causas en los diferentes distritos, esta Cámara estableció una serie de pautas para uniformar los criterios para llevarlos adelante (cf. Fallos CNE 4086/08; 4265/09; 4266/09; 4443/10 y 4524/11) y, fundamentalmente, para acentuar la celeridad en la actuación del Cuerpo de Auditores Contadores (cf. Acordada N° 105/08 CNE, consid. 5°) y, así, propiciar el cumplimiento de los plazos legales previstos para el desarrollo oportuno de los procesos de control patrimonial (cf. Acordada CNE cit., consid. 11).-

3°) Que por otra parte, no puede dejar de hacerse notar la vinculación que existe entre la obligación legal de rendir cuentas del financiamiento de las actividades partidarias, con los deberes y pautas de comportamiento ético que corresponde al ejercicio de la función pública (ley 25.188) por los candidatos que resultan electos.-

En tal sentido, esta Cámara ha señalado que "los candidatos que los partidos postulan deberán desempeñarse con observancia y respeto de los principios y pautas éticas de honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana y deberán proteger y conservar la propiedad del

Poder Judicial de la Nación

Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados - art. 2, incs. b y f, ley 25.188- (cf. Fallos CNE 3010/02)" (cf. Fallos CNE 3743/2006).-

De allí, entonces, deriva también la exigencia de que se imprima celeridad en la resolución de los trámites de control de balances e informes de campañas electorales.-

4º) Que teniendo en vista lo expresado, con relación a los informes de financiamiento de las campañas electorales del año 2015, el Tribunal requirió a los señores jueces federales con competencia electoral de todo el país que informasen acerca del estado de trámite de dichos procesos (cf. Expte. S.J. N° 249 F° 90, oficios del 15 de diciembre de 2016 y 8 de marzo de 2017). De las respuestas obtenidas -pendientes incluso en algunos casos- resulta que existe una cantidad significativa de causas en las que no se ha dictado sentencia sobre la aprobación o desaprobación de las cuentas de campaña.-

En tales condiciones, y toda vez que este Tribunal tiene la responsabilidad de asegurar la aplicación de las normas y principios que procuran el conocimiento público sobre las fuentes de financiamiento y gastos efectuados por las agrupaciones políticas, corresponde reiterar la necesidad de dar preeminencia al aludido principio de celeridad, traducido actualmente en mandato legal.-

Por ello, ACORDARON:

Requerir a los señores jueces federales con competencia electoral de todo el país la pronta resolución de las causas pendientes en materia de control patrimonial de las campañas electorales desarrolladas en 2015.-

Ofíciense, comuníquese y publíquese en el sitio de Internet.-

Firman dos jueces del Tribunal por encontrarse vacante el restante cargo de Juez de Cámara (cf. art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).-

Fdo.: SANTIAGO H. CORCUERA - ALBERTO R. DALLA VIA - Ante mí:
HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO (Secretario de Actuación Judicial).-